

quejoso; las pruebas que rindió, el alegato que hizo; la sentencia del juez de Distrito y todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: que las quejas del C. Montes, hijo, se reducen á cuestiones que ya han sido resueltas por autoridades competentes, empleando aquel sus recursos y aplicando estas las leyes relativas, hasta llegar al cumplimiento de una ejecutoria en forma, y

Considerando: que en esa virtud, los artículos 4 y 14 de la Constitución federal que se invoca para fundar el recurso de amparo, como inconducentes, no han podido ser conculcados. Por los propios legales fundamentos del juez 1º suplente de Distrito del Estado de Coahuila, y con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia que el mismo juez pronunció con fecha 26 de Julio último, en la que declara:

Primero; Que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Jesus Montes, hijo, contra la orden del Ministerio de Hacienda fecha 5 de Noviembre de 1868, contra la parte relativa de la sentencia del superior tribunal de Circuito de estos Estados, que pronunció en el juicio ejecutivo que le promovió la gefatura de hacienda, por adeudo de seiscientos sesenta y seis pesos, setenta y seis dos tercios centavos, el 13 de Setiembre de 1869, ni contra las disposiciones dictadas por el C. Lic. Mariano Sanchez, como propietario de este juzgado, para su ejecucion.

Segundo; De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la ley citada sobre juicios de amparo, se impone al mismo Montes la multa de cien pesos que se hará efectiva al ser confirmada esta sentencia.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de Distrito de Coahuila para los efectos consiguientes, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto

del primer punto y por mayoría respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México Agosto veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juez de Distrito de Puebla, por José M. Rosete y socios, por haber sido condenado á la pena de muerte, con violacion de garantías individuales.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 3º suplente de Distrito:

Cuando se interesan por una parte la justicia, la tranquilidad y seguridad pública, y por otra la vida de cuatro miserables endurecidos en el crimen, y el amor propio de algunos abogados cuya brillante reputacion nada aumentaría por un efimero y poco envidiable triunfo, el suscrito no puede tener la menor vacilacion para optar por el partido que la justicia y la humanidad le dictan, aun cuando no se lo marcara con tanta precision su deber.

Se equivocan intencionalmente los actores del ocuso que motiva este espediente, al creer que el crimen de sus defendidos se cometió solamente el dia de la captura del Presbitero Vigueras; y sin recurrir á doctrinas ni comentarios, basta ver la definicion legal del plagio para persuadirse de que el de ese señor se ha cometido dia por dia y

minuto por minuto, desde el momento de su aprehension hasta el de su soltura: "Comete el crimen execrable de plagiar el que de autoridad privada reduzca á prision ó cautividad á una ó muchas personas,....." Dice el artículo 1º de la ley de 3 de Junio de 1861. Si pues, con posterioridad al seis de Junio de este año ha estado reducido á prision el Presbítero Vigueras por autoridad privada, el crimen se ha cometido con posterioridad á la ley de suspension de garantías; y consta del informe, que el ofendido no obtuvo su libertad sino hasta el día ocho.

Resultando evidente, que los delincuentes han debido ser juzgados con arreglo á la ley de 13 de Mayo último; bastaria para desechár el recurso interpuesto la expresa disposicion de su artículo 4º en que justamente podria fundarse el fallo que así lo declarara; pero como se dice por los ciudadanos defensores que esa ley es anticonstitucional, se hace indispensable decir algo sobre este punto.

El mecanismo ó sistema de nuestras leyes consiste, en que una ó muchas personas dicten una disposicion cualquiera, sobre materia para la cual no tengan prohibicion emanada de la carta constitucional; y esta sanciona y autoriza tal disposicion siempre que se halle en esas condiciones. Las personas que han expedido la ley de Mayo tienen indudablemente la autoridad de hacerlo, pues son las que forman el poder legislativo y ejecutivo de la Nacion; y la materia sobre que han legislado es la de suspension de garantías, que es de la órbita de sus facultades, en virtud de la misma Constitucion.

A la ley pues, bajo ningun aspecto puede objetársele vicio de anticonstitucionalidad, y sin el menor esfuerzo se comprende, que no hay la menor oposicion entre tal ley y la Constitucion. De otra manera, sería necesario que las leyes humanas fueran eternas, pues existiendo una, la que se diciera contraria sería ilegal; jamas podria el legislador dispensar del cumplimiento de un

precepto existente, y resultaria la obra superior al hombre.

Que la ley de Mayo infringe las garantías constitucionales es un hecho; pero ella es constitucional, y la Constitucion está sobre todas las garantías posibles. Por lo demas, todas las constituciones habidas y por haber se han dado y se seguirán dando para el bien de la sociedad, y jamas para garantizar el crimen ni para proteger la impunidad de los culpables. La sociedad tiene el derecho de perseguirlos y estirparlos, y los representantes de ella cumplen con su deber cuando dictan medidas á ese fin.

Si por motivo de una guerra invasora ó de conquista se suspenden las garantías individuales, nadie duda que tal suspension sea justa y constitucional, y eso que los que sufren sus consecuencias ninguna causa han dado para semejante medida, ni estuvo en sus facultades evitar el deplorable motivo. Entonces, ¿por qué se declama tanto contra una suspension de garantías que no se refiere mas que á los plagiarios que son el azote de la sociedad, y que á nadie alcanzará si antes no se pone por su propia voluntad y por su crimen en las condiciones de la suspension? esto es inexplicable. Poco podrá la ley contra el plagio mientras haya tan virtuosos y humanitarios defensores del plagio, aunque declamen ardientemente contra el plagio.

Las razones expuestas, unidas al bien razonado informe del C. jefe político José M. Espinoza y Bandini, sirven de fundamento al Promotor fiscal para pedir á vd. C. Juez, se sirva declarar con la justificacion que le es característica, sin lugar el recurso de amparo promovido por los defensores de los plagiarios José M. Roseto, Rafael Gonzalez, Francisco Garcia y Juan Dupaux, en virtud de que no procede segun la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Julio catorce de mil ochocientos tetenta y uno.—(Firmado.)—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Agosto siete de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la solicitud de los abogados defensores de José María Rosete, Rafael González, Francisco García y Juan Dupaux que apoyados en la ley de 20 de Enero de 1869 piden amparo contra los procedimientos del C. jefe político de esta capital por haber este funcionario sometido á su conocimiento y decisión la causa que ha instruido á los expresados individuos con motivo del plagio que sufrió el presbítero D. Martín Vigueras, procediéndose conforme á la ley de 18 de Mayo del presente año, lo que en sentir de los defensores importa violación en las personas de los reos de las garantías individuales que la Constitución otorga en sus artículos 13, 14, 20, 21 y 23 en su segunda parte, puesto que cometido el delito en época en que habia cesado absolutamente la ley de 9 de Abril de 1860 y en que aun no se expedía la de 18 de Mayo, no ha debido procederse conforme á las prescripciones de esas leyes; y que al obrarse, con sujeción á la última de ellas se han vulnerado los principios constitucionales, no solo porque se juzga por medio de ley especial y por un tribunal privativo; no solo porque se da á esa ley un efecto retroactivo, sino porque se aplica pena propiamente tal por autoridad que no es judicial siendo esa pena la de muerte, y que solo puede imponerse en los casos marcados en el artículo 23 del código fundamental de la Nación; visto el informe del C. jefe político y la copia certificada que remitió de algunas constancias de la causa, cuyas constancias no influyen en la cuestión del amparo, pues á este juzgado no incumbe porque no tiene que decidir si los quejosos son ó no culpables del delito de que se los acusa sino que lo único que se ventila ante él, es si los procedimientos de aquel funcionario, aun siendo cierto el plagio, conculcan ó violan las garantías individuales,

para así conceder ó denegar el amparo; visto el pedimento fiscal á fojas 8: la prueba producida por los peticionarios en el certificado de fojas 14, lo alegado por éstos con todo lo demás que ha debido tenerse presente.

Considerando: que el plagio que sufrió el presbítero D. Martín Vigueras y de que se acusa á José M. Rosete, Rafael González, Francisco García y Juan Dupaux se consumó la mañana del 1º de Mayo último, como lo justifica suficientemente no solo el certificado de fojas 14 sino el mismo informe del C. jefe político.

Que es indudable que la ley de 1870 suspendió por un año las garantías individuales otorgadas por la Constitución en sus artículos 13, 19, 20 y 21, cesó en Abril último, puesto que en el art. 7º de la citada ley se previno que: "*las suspensiones á que se refiere el art. 1º y la autorización que en el art. 4º se da al Ejecutivo, durarán hasta el primero de Abril de 1871.*"

Que no es menos cierto, que la nueva ley de suspensión de garantías respecto de los salteadores y plagiarios "se expidió en México el 18 de Mayo" de este año, publicándose en el Estado el día 6 de Junio.

Que esto supuesto y estauado comprobado como lo está, que el delito se cometió el 7 de Mayo, es decir en el espacio de tiempo que medió entre la cesación de la antigua ley y la expedición y publicación de la nueva, es patente que los reos de aquel delito no han debido ser juzgados por las reglas establecidas en esas mismas leyes, ni por la autoridad que designan, sino que el conocimiento y decisión de la causa están sugetos á los jueces del fuero común, una vez que, como se vé, el plagio se cometió en una época en que no estaban suspensas las garantías individuales.

Que al procederse por el C. jefe político, en la forma que lo ha hecho, sometiendo sus actos á la ley de 18 de Mayo para darles cierto barniz de legalidad, ha violado la garantía constitucional otorgada en el art. 13 del código fundamental, por la

que, *"En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales."* Que cometido el delito el 7 de Mayo, y publicada la ley el 18 del mismo, en esta ciudad el día 6 de Junio, el C. jefe político, no se limitó á aprehender á los culpables, sino que se avanzó á proceder en su contra, formando causa con arreglo á dicha ley y aun aplicó la pena que ella señala, sin tener jurisdicción de ningún género, con lo que vulneró la garantía concedida en el art. 14, en cuya virtud, *"Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicando á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley,"* y conculcó el principio constitucional consignado en el art. 21, respecto á que *"la aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial,"* no teniendo este carácter el referido funcionario, pues no podía conferirsele una ley que ni aun se expedía por el Congreso de la Unión cuando se perpetró el delito.

Que los procedimientos irregulares del C. jefe político no pueden cohonestarse con la razón emitida en su informe, sobre que *"no debe calcularse la época del plagio desde el día en que la víctima fué capturada, sino desde el en que recibió su libertad,"* pues ni por el tenor de las leyes que definen el plagio, ni por los principios generales del derecho en materia criminal, se pueda admitir el absurdo de que no se tenga por cometido un delito el día en que se consuma, pues si así fuere se incurriría en el contra sentido de que no se podía considerar comprendido en una ley, como la de que se trata, un plagio cometido estando ella vigente, solo porque el plagiado viniera á recobrar su libertad después de terminado el tiempo por el que debió rejir la misma ley: que menos puede ser aceptado el fundamento que el C. jefe político pretende hacer valer, para fundar la jurisdicción que en el caso ha querido atribuirse, en orden á que el plagio es uno de aquellos

delitos que llaman de *trato sucesivo*; por este solo se atiende, en opinión de los autores, entre ellos el Sr. Peña y Peña tít. 1º pág. 236 y Gutierrez en su práctica criminal tomo 1º cap. 1º para fundar la jurisdicción del juez de cualquier lugar en que al ladrón se encuentre con la cosa robada, lo que no es aplicable al caso de que se trata: que la irregularidad del procedimiento del C. jefe político, realza mas con solo tener presente, que consumado el plagio, como se ha probado, el día 7 de Mayo aprehendido uno de los reos, José María Rosete el día 9, (fojas 15 del certificado exhibido por la gefatura,) no entrando como no podía entrar en la prevision de aquel funcionario, por mucha que se le conceda, que se expediría una ley de suspensión de garantías respecto de plagiarios ni pudiendo tampoco estar á su alcance en qué fecha recobraría el presbítero Vigueras su libertad, ni en la que los otros culpables serían aprehendidos, es incuestionable que si comprendía sus deberes, el mismo funcionario lo que ha debido hacer, en cumplimiento de ellos, pues supuesta la no existencia de la ley de 7 de Mayo, poner desde luego en noticia del juez ordinario el suceso para que procediera á formar la averiguación consignándole el día 9 al reo aprehendido, haciendo lo mismo respecto de los capturados con posterioridad: que al obrar de otro modo como lo hizo, tomando conocimiento de un delito, no sujeta á la esfera política ó administrativa formando causa, sentenciando con arreglo á una ley dada con posterioridad á la consumación del mismo delito, el C. jefe político no solo se constituyó juez especial, no solo dió retroactividad á la ley de 18 de Mayo, sino que aplica pena sin tener atribuciones judiciales, violando así las garantías de que se ha hecho mérito; que no son de estimarse los conceptos del C. Promotor fiscal que sostiene la jurisdicción del jefe político, fundándose menos en principios legales, que en ese natural horror que inspira el delito de plagio, y en

el interes que la sociedad tiene en que se castigue á los culpables, pues ni ese horror, ni ese interes, sino solo la ley, pueden dar facultades á la autoridad para la represion del crimen y que si la sociedad clama justamente por el castigo, este debe aplicarse por juez competente y bajo las formas tutelares de la justicia, principalmente cuando se trata de las garantías individuales que otorga la Constitucion, que segun su art. 126 es la ley suprema de la Union. Por estos fundamentos y con apoyo de los artículos 13, 14, 20 y 21 de la misma Constitucion, en uso de la facultad que concede el art. 101 de la misma Constitucion, y la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la justicia de la Union ampara á José M. Rosete, Rafael Gonzalez, Francisco García y Juan Dupeaux contra los procedimientos del C. gefe político de esta Capital, por haber violado las garantías individuales, conociendo del plagio que sufrió el presbítero Vigueras, atribuyéndose una jurisdiccion que en el caso presente compete á la justicia ordinaria. Hágase saber y sacándose testimonio de esta resolucion, publíquese en el periódico oficial remitiéndose desde luego este expediente con atento oficio á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo decretó el C. Lic. José de Jesus Lopez, juez 3º suplente de Distrito.—*José de Jesus Lopez.*—Ante mí.—*Antonio García Mosqueira.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla por los CC. licenciados José M. Galicia y Aristogui, Miguel M. Anzures, José M. Bautista y Manuel Espinoza de los Monteros, defensores de José M. Rosete, Rafael ó Gabriel

Gonzalez, Francisco García y Juan Dupeaux, contra el C. gefe político de la misma ciudad, que se avocó el conocimiento de la causa de los cuatro últimos, juzgándolos como reos de plagio del padre D. Martin Vigueras; y

Considerando: que segun aparece en el expediente, el plagio se verificó el siete de Mayo último: que la ley sobre plagiarios publicada en Abril de 1870, cesó en Abril último: que la ley sobre plagiarios se publicó en Puebla el 6 de Junio del presente año: que por lo mismo el delito se cometió en la época de la cesacion de la ley de 1870 y antes de expedirse la ley de Mayo de este año: que los reos fueron aprehendidos antes de la publicacion de esta ley, debiendo quedar por lo mismo exclusivamente bajo la autoridad de la justicia ordinaria, por lo que los reos de ese delito no han debido ser juzgados con arreglo á tales leyes, ni por la autoridad especial que designan, sino que deben serlo por la autoridad del fuero comun: que en consecuencia, avocándose como se avocó el C. gefe político el conocimiento de ese delito, y condenando como condenó á los acusados á la pena capital, ha juzgado como juez especial y por ley privativa, dada con posterioridad al hecho, aplicando pena que solo puede aplicar la autoridad judicial comun, con lo que se han atacado las garantías á que se refieren los artículos 13, 14 y 21 de la Constitucion federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el día 7 del presente por el juez de Distrito de Puebla que declara: que la justicia de la Union ampara á José M. Rosete, Rafael Gonzalez Francisco García y Juan Dupeaux, contra los procedimientos del C. gefe político de esa capital por haber violado las garantías individuales conociendo del plagio que sufrió el presbítero Vigueras, atribuyéndose una jurisdiccion que en el caso presente compete á la justicia ordinaria.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez de Distrito de Puebla con copia certificada de

esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragna.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Agosto veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. José Millet, contra el C. Tesorero municipal, que mandó rematar los bienes embargados al quejoso, por contribuciones que debía.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

En su pedimento relativo á la suspension del acto reclamado, en el presente juicio de amparo, expuso el infrascrito, que no se objetaba en principio, por el quejoso, la disposicion particular del Estado en virtud de la cual le cobraba arbitrios municipales el tesoro del H. ayuntamiento de esta ciudad, sino la aplicacion indebida de un artículo de ella y la incompetencia del mismo tesoro que, constituyendose por si mismo juez de la controversia suscitada contra él, trataba resolverla sin atender á que establecia así su tribunal no solo especial por que no es de los que tienen facultades para decidir en juicio la contencion de las partes, sino

absurdo é insostenible por la peligrosa facultad que pretende abrogarse de sentenciar definitivamente su propia demanda. Pero aun cuando careciese de esta anomalia, el tribunal que quiere establecer en el presente caso el C. tesoro de quien se trata, bastaba que no fuera establecido por la ley para juzgar y decidir las contiendas del genero á que corresponde la que ha provocado el C. Millet, para que se considerasen violadas en su persona las garantías que protege el art. 13 de la Constitucion, que no quiere que nadie pueda ser juzgado por tribunales especiales. Así es que, con fundamento de este principio constitucional y del art. 1º frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, el infrascrito fiscal pide á vd. se sirva otorgar al C. José M^o Millet el amparo que solicita en el presente juicio.

Mérida, Julio catorce de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*P. Higueros.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Julio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo solicitado por el C. José Millet contra el C. tesoro de los fondos de este municipio, por haber mandado rematar los bienes que le embargó por arbitrios municipales adeudados. Visto lo informado por dicho tesoro y lo pedido por el C. fiscal sobre la suspension del acto reclamado; el decreto de suspension de dicho acto; lo informado sobre lo principal; el pedimento fiscal y la citacion para sentencia, con cuanto mas ver convino.

Considerando: que el quejoso alega que aunque no considera anticonstitucional el cobro de arbitrios que se le hace, pero que cree que por la misma ley en que se funda el cobro, no debe pagarlos: que por esta razon no ha pagado; pero si ha pedido que